ISSN 1852 3846

SÍNTESIS MUNDIAL

Resumen mensual de los acontecimientos internacionales del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación para la Integración Federal

JUNIO/JULIO 2012

funif

Fundación para la Integración Federal

AMÉRICA LATINA CONTRA EL GOLPE

Frente al golpe institucional que sufrió el presidente paraguayo, Fernando Lugo, las organizaciones internacionales americanas no se quedaron de brazos cruzados y tomaron cartas en el asunto.

SÍNTESIS MUNDIAL

SÍNTESIS MUNDIAL
Junio/Julio 2012
ISSN **1852 3846**

COORDINACIÓN GENERAL CEPI
Cecilia Rubio

DIRECTOR EDITORIAL
Germán Martínez

CONSEJO EDITORIAL Y DISEÑO
Luciano Herrero
Luciana Rodríguez
Maricruz Scotta

STAFF:
Imanol Barrangú, Graciela Capisano, Julieta Ceresole, Florencia Fantin, Griselda Fernández, Fabián Drisun, Luciano Herrero, Paula Liveratore, Agustina Lovera, Agustina Marchetti, Paula Martín, Ana Mucci, Rocío Novello, Rafael Pansa, Gonzalo Pascual, Juan Ignacio Percoco, Luciana Rodríguez, Maricruz Scotta, Romina Viale.

SÍNTESIS MUNDIAL es una publicación del **CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS INTERNACIONALES** perteneciente a la **FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL**

FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL:
Entre Ríos 583 1º piso dpto. B
CP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.

Tel/Fax:
(54) (0341) 440-0925 / 440-8968

E-mail:
rosario@funif.org.ar
sintesismundial@fundamentar.com

URL: http://www.fundamentar.com

SUMARIO

EDITORIAL — 1

EUROPA

Paula Liveratore
La UE en la mira del G20 — 3

MEDIO ORIENTE

Fabián Drisun
Tensión en Medio Oriente — 4

Rocío Novello
Egipto: Una dura transición — 5

AMÉRICA LATINA

Florencia Fantín
Las presidenciales en cuestionamiento — 7

Gonzalo Pascual
La condena de América Latina al golpe — 9

Imanol Barrangú
Crónica de un fracaso anunciado — 12

Romina Viale
Escalada de conflictividad en Bolivia — 13

Graciela Capisano
La Agenda externa de CFK — 15

ÁFRICA

Agustina Marchetti
Charles Taylor y su merecida condena — 20

SÍNTESIS MUNDIAL

EDITORIAL

Cuando en 1965 la ONU se pronunció por primera vez sobre la cuestión Malvinas, a través de la Resolución 2065, primero lo encuadró como un caso colonial y, segundo, reconoció la existencia de un problema de soberanía entre Reino Unido y Argentina que debía ser resuelto mediante negociaciones entre las partes. Desde esa fecha hasta la actualidad este reclamo encuentra la rotunda negativa de una de las partes, Reino Unido, que en una actitud contraria al Derecho Internacional desoye constantemente lo estipulado por la Comunidad Internacional y afirma que sólo respetará la libre determinación de los habitantes locales.

Según la Resolución 1514, conocida como "La Carta Magna de la Descolonización", el principio de libre determinación es aplicable cuando el mismo no afecte la unidad nacional y la integridad territorial de un país. La Argentina ha demostrado que, una vez proclamada la independencia de España, las islas Malvinas formaron parte del territorio argentino, estuvieron gobernadas por autoridades argentinas y habitadas por pobladores argentinos, hasta que el Reino Unido ocupó por la fuerza el archipiélago en 1833.

Además es necesario que exista de un pueblo sojuzgado y colonizado para reconocerles el derecho de libre determinación, y los habitantes de las islas, lejos están de serlo. Estos son descendientes de los antiguos colonos que llegaron luego de la usurpación de 1833, o son nuevos colonos que han venido a las Malvinas como empleados de la administración británica o de las empresas concesionadas por el Reino Unido para explotar económicamente las islas.

La ONU tuvo en cuenta todos estos antecedentes cuando dispuso en la Resolución 2065 que la solución al conflicto deba contemplar la negociación entre ambos paises teniendo en cuenta los intereses de los isleños, y no sus deseos, como pretendía el Reino Unido, reconociendo implícitamente que el derecho de libre determinación no corría para este caso.

En estas últimas semanas, más precisamente el pasado 12 de junio, comenzó a escribirse un nuevo episodio en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. Ese día, el gobierno de las islas anunció la realización de un referéndum, a celebrarse el primer semestre del 2013, cuyo objetivo principal es que los isleños se manifiesten sobre el status político del archipiélago. Inmediatamente conocida la noticia, el gobierno británico aseguro que "respetara y defenderá" el resultado de la consulta. "Siempre he dicho que depende de los isleños elegir si quieren ser británicos y que el mundo debe escuchar lo que piensan" declaró el primer ministro David Cameron. El mandatario británico además sostuvo que el referéndum "determinará sin ponerse en duda las opiniones de los habitantes de las Falklands (Malvinas). Gran Bretaña respetará y

defenderá esa opción. Esperamos que todos los integrantes de la ONU cumplan con sus responsabilidad bajo la Carta Orgánica de la ONU y acepten la decisión de los isleños acerca de cómo quieren vivir"

Lejos de perjudicarnos, la consulta pergeñada por los isleños y apoyada por el gobierno británico, podría favorecer nuestra posición.

Primero porque votaran por continuar estando bajo la égida británica, demostrando así que no forman un pueblo al que deba aplicarse el derecho de libre determinación. Segundo porque de realizarse el referéndum, Gran Bretaña estaría dando lugar a los deseos de los isleños, contrariando lo estipulado por la ONU en la Res. 2065.

Esto podría movilizar el rechazo de la Asamblea General y motorizar una nueva resolución favorable a la Argentina que expusiera aun más el ilegitimo accionar de Gran Bretaña, como sucedió en 1967 con motivo de celebrarse el referéndum gibraltareño. Cuando en 1967 el Reino Unido hizo lo mismo en Gibraltar, (desconociendo lo establecido en la Resolución 2070, que en iguales términos de la 2065 postulaba una solución negociadas con España, teniendo en cuenta los intereses de los gibraltareños, no sus deseos), la ONU condeno la convocatoria a la consulta y recordó en una resolución posterior que "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas." Esto significo un triunfo diplomático para España ya que con esta mención, de manera implícita la ONU negaba el derecho a la libre determinación de la población de Gibraltar.

LUCIANO HERRERO

POR PAULA LIVERATORE

LA UE EN LA MIRA DEL G20

El grupo de las 20 mayores economías del mundo rescata nuevamente a una Europa en crisis para calmar a los mercados y evitar así otra recesión global.

La VII cumbre del G-20 llevada a cabo el 18 y 19 de junio en Los Cabos, México, tuvo como eje principal dar respuesta a una realidad económica que se presenta inestable y compleja mundialmente y que tiene como telón de fondo las incesantes tormentas económicas de la zona euro.

la profundidad de la crisis marca el tiempo de los encuentros del G20, que desde sus comienzos en el 2008, los líderes del foro del G20 se reúnen con una periodicidad sin precedentes..

Los miembros del G20, que representan el 80% de la economía mundial, concedieron al Fondo Monetario Internacional (FMI) dinero para el rescate del euro, siendo el apoyo más destacado el del influyente bloque de países emergentes (BRICS), compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (China contribuirá con 43 mil millones de dólares y los otros, con 10 mil millones cada uno).

Con este compromiso económico, los líderes del G-20 intentan enviar un mensaje de optimismo y recuperar el crecimiento y la estabilidad en una Europa que parece resquebrajarse. Claro está que a cambio los países de la Unión Europea (UE) deberán aplicar planes a corto y mediano plazo y acatar una serie de rigurosas medidas para intentar sanear sus finanzas y lograr reformas estructurales en su constitución misma.

Entre sus premisas, los Estados miembros de la UE se comprometen a mejorar la calidad de los trabajos, especialmente la de los trabajadores jóvenes, equipararse en cuestión impositiva y bancaria, eliminar los paraísos fiscales y alcanzar un crecimiento constante y regulado.

En concreto, entre los varios ajustes y medidas, se destacan:

-La tasa a las transacciones financieras que se aplicará a partir del 2013. Es decir, la instauración de una tasa de 0,1% para las acciones y las obligaciones, y de 0,01% para los demás productos financieros. Esta medida generaría hasta 57 mil millones de euros en toda la UE.

-Puesta en funcionamiento del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) a partir de julio. El MEDE, institución intergubernamental, se creó para suministrar ayuda financiera bajo condiciones estrictas, a los países que tengan graves problemas de financiación. Esta asistencia se proporcionará principalmente en forma de préstamos.

-Las euroletras propuestas por Francia. Es decir, emisión de títulos para la deuda a corto plazo. Sin embargo, a falta de consenso entre la Canciller alemana, Angela Merkel, y el Presidente francés, François Hollande, no se impulsarán los eurobonos, iniciativa de éste último para convertir la deuda de los diferentes países de la zona en una sola.

Así mismo, lo que se busca con esta nueva arquitectura de la UE es crear un marco sólido en materia de coordinación y supervisión de las políticas fiscales entre sus miembros. Por ejemplo, la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo económico) indica que se consiguieron considerables incrementos de la recaudación (1.500 millones en Italia) al poner límite a prácticas fiscales para empresas multinacionales, que aprovechan el privilegiado tratamiento tributario que se da en cada país.

Dichas medidas y reformas no son sólo para calmar los ánimos dentro de la UE, ya que la crisis sistémica que acarrea desde el 2008 ya empieza a repercutir con efectos adversos en otros países: China rebajó los tipos de interés para reactivar la demanda; India apenas creció un 5% en el primer trimestre en comparación con su crecimiento sostenido que en algunos casos llegó al 9%; el PIB de Brasil se ha estancado y Rusia bajó sus previsiones económicas para este año.

Además países como Inglaterra o Estados Unidos se ven profundamente afectados en sus exportaciones. El primer ministro inglés, David Cameron, anunció que si la crisis europea persiste deberán salir a buscar nuevos mercados. En cuanto a Estados Unidos, la zona euro representa el 20% de las exportaciones de dicho país y con la proximidad de las elecciones presidenciales, que Europa salga de la crisis es extremadamente importante para el presidente Barack Obama.

Como se observa, la crisis financiera mundial del 2008 puso de manifiesto importantes deficiencias en el diseño y la constitución de la UE. Un cambio de liderazgo mundial a nivel económico es evidente y los llamados países emergentes salen a socorrer a una Europa envejecida y corroída por sus insalvables diferencias sociales, políticas y económicas. Esperando que el paquete de ajustes impuesto sea un respiro y no vuelva a producirse una recesión internacional, las grandes economías del mundo, miran a Europa.

TENSION EN MEDIO ORIENTE

POR FABIAN DRISUN

El lunes 18 de junio de 2012 se inició una escalada de violencia entre milicianos palestinos y el ejército israelí tras un enfrentamiento cerca de la frontera con Egipto, en el cual murieron dos personas. Este hecho amenaza con incrementar el conflicto entre el grupo Hamas e Israel. A la hora de analizar los hechos recientes hay que entenderlos como un conflicto de desgaste o de larga duración, dentro del cual existen momentos de mayor o menor tensión, ya que tanto Hamas como Israel no se reconocen mutuamente, es decir Israel califica a Hamas como un grupo terrorista y este último niega la existencia del estado judío.

Desde la Operación Plomo Fundido las relaciones entre Hamas e Israel han sido más tensas que nuca: la misma fue llevada a cabo hacia fines del 2008 y principio del 2009 y fue la ultima incursión masiva del ejercito israelí en territorio palestino por la sucesiva caída de misiles sobre el sur de Israel y que dejó miles de víctimas fatales.. Hamas durante mucho tiempo ha sido quien llevo adelante los mayores ataques terroristas al interior de Israel razón por la cual ha sido calificada por numerosos países como una organización terroristas. Entre el año 2006 y 2007 Hamas de manera democrática tomó el control de la Franja de Gaza iniciando así una división entre los palestinos, es decir, Al Fatah gobierna en Cisjordania y Hamas en Gaza. Recientemente, estas dos facciones han iniciado conversación para el establecimiento de un gobierno de unidad presidido por Mahmud Abbas, líder de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Y aunque todavía no se han establecido resultados concretos, las conversaciones parecen estar bien encaminadas cuando el pasado 6 de febrero decidieron en Doha que Abás dirigiera el Gobierno de Unidad Nacional que preparará las próximas elecciones presidenciales y legislativas palestinas. Más allá de este posible acuerdo para llevar adelante las elecciones, las posiciones sobre las futuras relaciones con Israel son muy diferentes: Hamas sigue llamando a la destrucción de Israel y un gobierno conformado por ambas partes palestinas podría entorpecer las negociaciones sino se retira del estatuto de Hamas esa premisa.

Los recientes hechos de violencia demuestran que Israel no tolera ningún intento de agresión contra su población o su territorio. Netanyahu gobierna desde el 2009 y recientemente ha consolidado su poder al formar un gobierno de unidad nacional con 94 de los 120 escaños que tiene la Kneset (parlamento israelí), al estrechar lazos con Kadima. Netanyahu, tras los enfrentamientos en la Franja de Gaza aseguró que “el Ejército israelí actuará enérgicamente contra aquellos que están tratando de hacer daño” y reafirmó que “si es necesario, actuará con más fuerza aún”. Estas declaraciones van en clara consonancia con una política de gobierno de responder enérgicamente cualquier agresión y también, según estableció el Primer Ministro, de tratar de devolverle la calma al sur del país.

Israel está atravesando una época de incertidumbre a nivel internacional. En primer lugar, tras la victoria de Mursi en Egipto, Israel estableció que acepta el resultado de las elecciones y que espera seguir manteniendo relaciones a través del tratado de paz de 1979. En segundo lugar, Israel está a la expectativa de cómo se resolverán los conflictos en Siria que hasta ahora no han repercutido hacia Israel, pero teme que el cambio de gobierno altere la relativa estabilidad que tiene esta frontera.

A nivel interno, Israel enfrenta dos temas claves: el primero hace referencia a la política hacia la inmigración ilegal. En Israel viven cerca de 60.000 inmigrantes ilegales provenientes de África que llegaron al país a través de la frontera con Egipto, en su mayoría en carácter de refugiados desde Sudán. A partir del pasado 7 de junio, cuando el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó luego de ser reconocida como Estado número 193 por Naciones Unidas en 2011, que Sudán del Sur constituye un lugar seguro para la repatriación, el gobierno Israelí comenzó una nueva política con respecto a estas personas. Puso en marcha la campaña “Vuelta a casa”, que permite el retorno voluntario incentivado entregando dinero y pasaje de avión; o en caso contario, permite su detención para su posterior expulsión, ya que mas allá del tiempo que hayan permanecido en territorio israelí, estas personas no califican para obtener la ciudadanía y su llegada se dio por motivos meramente humanitarios. Este tema ha desatado un profundo debate, especialmente tras las declaraciones del Ministro del Interior quien manifestó que “su presencia pone en peligro la identidad judía y la democracia israelí”. Estas declaraciones fueron rechazadas por el Primer Ministro Netanyahu quien exigió que los inmigrantes deban seguir siendo tratados con humanidad ya que son seres humanos.

Un segundo tema es la modificación de la Ley Tal que exime a los ortodoxos de hacer el servicio militar obligatorio. Esta ley fue declarada inconstitucional en febrero pasado y por ende, debe ser modificada dando un mayor grado de igualdad a ortodoxos a la hora de servir al Ejército de Defensa de Israel. Otra modificación que se está tratando es la de incluir a ciudadanos árabes en el ejército, la cual fue rechazada no solo por árabes quienes alegan que “los árabes no deberían ser víctimas de la ley judía”, sino también por partidos ultranacionalistas, encabezados por Avigdor Liberman, quien estableció que incluirlos pondría en peligro al Estado de Israel.

La reciente escalada de violencia entre palestinos e israelíes es parte de un conflicto que está lejos de llegar a su fin, es un conflicto donde la tensión aumenta o disminuye y donde las conversaciones de paz están estancadas desde el 2010, pero tanto palestinos como israelíes enfrentan problemas más allá del conflicto territorial. Problemas que les hacen a la vida cotidiana, problemas que como extranjeros no observamos, solo vemos dos pueblos luchando por un territorio pero existe mucho más que eso, existen problemas comunes a todos los países y que unen más a ambos pueblos que la tierra que los separa.

EGIPTO: UNA DURA TRANSICIÓN

POR ROCÍO NOVELLO

Después de varios días de intriga y tensión, finalmente se conocieron los resultados definitivos de los comicios presidenciales desarrollados a mediado del mes de junio. Los mismos dieron como ganador al candidato de la Hermandad Musulmana, Mohamed Mursi, con un 51.7% de los votos frente a su rival, Shafiq, quien obtuvo el 48.3%. De esta forma, y por primera vez luego de la caída de la monarquía en 1952, un civil llega al ejecutivo por voluntad popular. Ahora bien, el hecho de que la organización musulmana haya alcanzado la Presidencia no lo dice todo.

A pesar de que hayan logrado hacerse con el Ejecutivo, no está claro cuanto margen de maniobra dispondrán para gobernar. Dicha incertidumbre se genera, en gran medida, por los numerosos interrogantes que existen en torno a la capacidad del nuevo mandatario en hacerle frente a las FFAA, las cuales han manejado históricamente los hilos de la política egipcia y un porcentaje considerable de la economía del país (el conjunto de empresas y capitales concentrados por el sector castrense explican más de 1/3 del PBI). En este marco, las últimas medidas tomadas por ambos sectores dan cuenta de la existencia de una puja constante por ganar mayor influencia sobre la escena política, tornando aún más difícil la ya de por si compleja transición.

Primeras Palabras

De acuerdo al perfil señalado por diversos analistas internacionales, Mohamed Mursi se presenta como un moderado entre los conservadores, pero en ningún caso un reformista. Esto quedó en evidencia a lo largo de sus primeras palabras como Presidente electo donde, usando un tono conciliatorio, buscó mostrar su imagen de hombre religioso pero moderado, el cual no pretende alarmar ni a los sectores más liberales de la sociedad egipcia ni a las minorías religiosas que habitan el país, así como tampoco a su vecino, Israel. Así pues, Mursi sostuvo que "gobernaría para todos los egipcios", en un intento de alejar aquellos fantasmas que puedan emanar de un gobierno de corte islámico.

Más aún, señaló que centrará su gestión en el marco de "una referencia islámica moderada para devolver la estabilidad, la justicia y la prosperidad al país tras un año de caos". En sintonía con lo anterior, prometió respetar los tratados internacionales contraídos por el país, en particular el acuerdo de paz con Israel de 1979, aunque aseguró que "no escatimarán esfuerzos para mejorar la situación del pueblo palestino".

Es interesante analizar cómo la cofradía, desde el comienzo de las revueltas hace más de un año atrás, procuró mostrarse de la manera más mesurada posible, evitando agitar las aguas, cuidando lo que sería una oportunidad única para alcanzar el gobierno. Este tipo de accionar no resulta algo novedoso para una agrupación caracterizada por el pragmatismo, habilidad que le ha permitido mantenerse en pie durante las épocas de proscripción y la censura que ha vivido desde su creación.

Asimismo, otro de los elementos que ha signado la continuidad de la Hermandad, ha sido su trabajo de base dedicado a brindar asistencia social a las clases más vulnerables – donde la presencia del Estado a la hora de brindar esos servicios era escasa o nula – lo que le valió su permanencia y desarrollo. La misma no esta sólo presente en las mezquitas, sino también en universidades, sindicatos y en centenares de pequeñas organizaciones que se dedican a la labor social y religiosa, supliendo, nuevamente, el rol de un Estado ausente y corrupto. Precisamente, fue esta estructura de alcance nacional, lo que le permitió al grupo sacar ventajas frente a otro tipo de partidos o movimientos menos articulados. Así, en un momento de desconcierto político supieron aprovechar su arraigo en la sociedad y se consagraron en la fuerza política de oposición mejor organizada de Egipto.

¿En qué Contexto Asume el Nuevo Presidente?

Un breve repaso de lo que aconteció en el último tiempo refleja las arduas dificultades que enfrenta la salida democrática en el país.

Tan sólo 48 horas antes del inicio de la segunda vuelta por la Presidencia, el Tribunal Constitucional egipcio anuló sorpresivamente la conformación de la Cámara baja, la cual había sido elegida meses atrás, al considerar que la composición de la misma quebrantaba la ley. Aquí

se debe tener presente que la normativa electoral, si bien en un primer momento, reservaba un tercio de las bancas de la Cámara Baja a candidatos independientes, luego del proceso de protestas que se conoció como la "segunda revolución" –a mediados de 2011– el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) buscó acordar junto con diversas agrupaciones políticas y manifestantes la modificación de la legislación en pos de que personas, aun con afiliación partidaria, también pudiesen presentarse como candidatos individuales.
Dicha medida produjo no sólo la disolución de la totalidad del Parlamento por decisión del CSFA –en el cual más del 70% de los escaños estaban en manos de partidos islamistas – sino que también permitió que el Poder Legislativo recayera sobre el mismo hasta la celebración de nuevas elecciones parlamentarias, las cuales no podrán anteceder a la sanción de la nueva Constitución. Este último punto no es menor, ya que implicó la promulgación por parte del sector castrense de un anexo constitucional que permite primordialmente el resguardo de sus propios privilegios al igual que su influencia política en el país más poblado del mundo árabe, además de restarle prerrogativas al entrante presidente. En concreto, sobre la Junta militar recae: el nombramiento del Primer Ministro, el control de su presupuesto y del Poder Legislativo, diversas facultades sobre la conformación de la Asamblea Constituyente y todo lo relacionado a temas de Defensa.
A lo anterior se le debe sumar la tensión que se generó en las últimas semanas. Período en el cual, el flamante Presidente dictó un decreto revocando la decisión de la Junta Militar de disolver la conformación parlamentaria y rehabilitó la Cámara Baja, donde su partido gozaba de una cómoda mayoría. Los Hermanos Musulmanes lograron una clara victoria en las elecciones legislativas celebradas hace medio año, cosechando cerca del 45% de los votos. En concreto, Mursi estableció que el Parlamento debe reanudar su labor legislativa de forma interina y entrar en plenas funciones luego de que la nueva Constitución sea ratificada. Convocando además a elecciones parlamentarias otra vez. Con este gesto Mursi busca recuperar el poder legislativo de las manos del Consejo Supremo, un activo de poder de gran peso a la hora de gobernar en medio de una vetusta estructura política. Así pues, la decisión del actual Presidente debe interpretarse en el contexto de fuerte puja y tensión en torno al cual giran islamistas y militares, en pos de obtener el poder en Egipto.
Sin embargo, el accionar de Mursi lejos está de ser el punto final de la discusión. En una sentencia hecha pública por el Tribunal Constitucional, se decidió suspender el decreto presidencial al considerar que esa norma vulneraba la legalidad vigente. El Constitucional se sumaba así al ala militar, la cual había instado a Mursi a retirar su decreto y a respetar el Estado de Derecho.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Saad Katatny, procuró evitar el agravamiento de la crisis jurídica que habría supuesto la existencia en paralelo de dos órganos que ejercieran el poder legislativo por lo que decidió levantar la sesión hasta que se expidan los Tribunales a cargo.
Ante esta escena, Mursi deberá gobernar desde una posición debilitada frente al ostensible poderío de las FFAA. Es así como, a pesar de haber obtenido la investidura presidencial, la disputa por el poder no ha terminado. Una compleja agenda doméstica e internacional y los limitados márgenes de maniobra con los que cuenta para gestionar políticas innovadoras son algunos de sus principales desafíos que tendrá que sortear.
Lo cierto es que, actualmente, la tensión y la incertidumbre son la norma y no la excepción. El período de transición, a pesar de haber finalizado el 30 de junio, parece extenderse en el tiempo y la conjugación entre elementos viejos, propios de los resabios de la era Mubarak, y los nuevos, provenientes de una ciudadanía movilizada y de nuevas autoridades en el poder, dan lugar a una situación de suma complejidad, donde las internas políticas se renuevan cada día.

LAS PRESIDENCIALES EN CUESTIONAMIENTO

POR FLORENCIA FANTÍN

Las elecciones del pasado 1º de Julio en México evidencian la debilidad institucional que padece el país desde hace muchos años. A pesar de las declaraciones oficiales se está discutiendo la transparencia del escrutinio que da por vencedor al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Peña Nieto.

Ahora bien, es preciso repasar algunos datos a tener en cuenta para poder comprender esta situación. Los principales candidatos a ocupar la silla presidencial en sucesión de Felipe Calderón (Representante del Partido Acción Nacional) eran: Andrés Manuel López Obrador abanderado por el Partido Revolución Democrática (PRD); Enrique Peña Nieto por la Coalición Compromiso por México, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista (Pvem); Josefina Vásquez Mota por el Partido Acción Nacional (Sucesora del actual presidente para las elecciones del PAN) y Gabriel Quadri por el Partido Nueva Alianza (Panal).

Crecimiento económico y reformas institucionales en México fueron los principales objetivos propuestos por los candidatos presidenciales de ese país. No obstante, sólo uno de ellos representaba el quiebre de lo que algunos denominan la herencia del "viejo régimen oligárquico" del PAN al PRI, a los cuales se los vinculan directamente por tener relación con los principales grupos delictivos causantes del estancamiento nacional, y ese era López Obrador.

El Instituto Federal Electoral (IFE) terminó de hacer el recuento oficial de votos para la elección presidencial una semana después del sufragio electoral. Otorgó la ventaja al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto con el 38,21% de los sufragios contra el 31,59% que le reconoce al candidato de izquierda, López Obrador, mientras que la oficialista Josefina Vázquez Mota se quedó con el 25,41%. El Partido Nueva Alianza conservó su registro al sacar 2,29% de la votación nacional.

Siendo éste el segundo “fracaso” del representante del PRD después de las elecciones de 2006 (donde perdió por 0,56 puntos porcentuales frente a Felipe Calderón) muchos creen que no hay opción viable dentro de los canales institucionales para lograr un cambio significativo. Por lo tanto, ese resultado generó gran indignación en diferentes grupos que apoyan al candidato de izquierda o que por lo menos pretendían evitar la llegada del "favorito de las encuestas", Peña Nieto. Es así como actualmente López Obrador decide no aceptar una inminente derrota. A diferencia de las elecciones de 2006, donde convocó a una gran manifestación que generó revuelo en la sociedad, en estas elecciones su posicionamiento se encaminó en dar pelea por la vía institucional. En relación a ello, presentó un pedido de recuento total de votos a lo que sumó la denuncia de la compra y coacción de los votos con tarjetas prepagas que entregó el PRI a electores del Estado de México a cambio de su voto.

El panorama pos electoral de México no se puede comprender si no se lo sitúa en el contexto nacional en que se sucedieron las elecciones de este año. Este país se caracteriza por la gran violencia interna que padece la población constantemente. Una sociedad-Presa del papel que juegan los principales grupos de poder como los narcotraficantes (Zetas, Cartel del Golfo), los funcionarios estatales corruptos asociados a estos grupos, las Fuerzas Armadas y la intrincada relación que existe entre estos actores. Además, la influencia de su vecino más próximo, Estados Unidos, no es menor. Estos problemas, atraviesan a la totalidad de la sociedad generando una masiva desmoralización. Esto lleva a que el principal reclamo para con los candidatos sea el de un cambio rotundo en la manera de dirigir las principales políticas públicas.

De esta manera se comprueba que diferentes sectores han respondido de distintas maneras a las presiones de las principales facciones. Esto quedó demostrado con las movilizaciones realizadas el año pasado entre las cuales se pueden resaltar la famosa caminata por la paz llevada a cabo en abril de 2011. La misma fue liderada por el actor Javier Sicilia, quien junto a víctimas de la delincuencia han demandado "poner fin a la estrategia de guerra" y cambiar "el enfoque militarista" en la lucha contra el narcotráfico. Las deficiencias por parte de los organismos estatales para la lucha contra el crimen organizado son más que evi-

dentes.
Con respeto a las elecciones, es relevante resaltar dos hechos importantes: primero, el gran despliegue por parte del Estado para garantizar la seguridad y evitar el fraude, la corrupción y los enfrentamientos de manera de poder legitimar el proceso electoral. Según estadísticas del IFE, las elecciones de este año fueron un 50% menos inseguras y hubo menores enfrentamientos que en las de 2006. Sin embargo, el clima electoral resultó ser complicado como muchos esperaban. En las diferentes localidades de México se llevaron a cabo enfrentamientos de todo tipo. Muchos de ellos, asociados también a las irregularidades del proceso de votación donde hubo casillas que se abrieron tarde y faltantes de boletas, además del secuestro de varias urnas al finalizar el día. Las ciudades donde sufragaban los principales candidatos fueron escenarios de enfrentamientos y entre ellas la que más llamó la atención fue la ciudad de Atlacomulco, a unos 150 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. Allí votó el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, quien fue abucheado por miembros del grupo "#yosoy132", lo que generó la respuesta de un grupo de seguidores del candidato. En segundo lugar, frente a este clima y como es característico de los momentos de crisis siempre propicios al surgimiento de algo nuevo, se da la emergencia de un nuevo grupo denominado #yosoy132 que comienza a jugar un papel destacado y esperanzador para la lucha contra la Corrupción.
El movimiento fue bautizado con ese nombre tras la difusión de un vídeo en el que 131 estudiantes mostraban sus carnéts de identidad y manifestaban su rechazo al candidato del PRI.
El número 132 hace referencia por tanto a la autoafiliación y apoyo de un miembro más a dicho movimiento que sería el destinatario del mensaje enviado por ellos a la población.
Desde la difusión en Mayo de ese vídeo el grupo de los indignados mexicanos no ha dejado de crecer. A pesar de que los universitarios son un número minoritario dentro de los diferentes sectores de lucha, es importante hacer hincapié en el gran despliegue mediático que han llevado a cabo para procurar crear conciencia al momento de votar. Entre los más importantes, la organización de un debate donde fueron invitados todos los candidatos a la presidencia. Estos candidatos fueron interpelados durante dos horas con duros cuestionamientos sobre sus propuestas y de la cual no participó, teniendo noción del posicionamiento del grupo, el candidato del PRI.
La convocatoria a ciudadanos de todo el país apuntó al compromiso de los mismos a participar de las elecciones no solo en la tarea de sufragar teniendo conocimiento de los intereses de cada postulante sino también a sumarse a al desafío de trabajar como "observadores de las elecciones", lo cual implica controlar colectivamente las irregularidades del proceso o denunciar todo intento de fraude que haya sido visto o escuchado.
La primera impresión daba a entender que este movimiento se disolvería posteriormente a las elecciones. Sin embargo, la frustración que generó el anuncio del éxito del único candidato por el cual se presentaban en contra, sumado al despliegue informativo del grupo monopólico AZTECATV/TELEVISA, antes y después de las elecciones en fomento de la victoria del mismo, exacerbaron sus ansias por seguir propagando sus ideas.
En síntesis, las elecciones de este año presentaron un escenario completamente diferente a las de 2006. Por un lado, el candidato Manuel López Obrador decidió tomar otro camino para combatir las irregularidades del sistema electoral, dejando de lado la vía de la presión social por la vía institucional. Por otro lado, se da la emergencia de un nuevo grupo estudiantil, #yosoy132, que ha motorizado activas y contundentes marchas en México y alrededor del mundo en repudio del resultado electoral.
Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de las diferentes protestas ejercidas la presidencia de Enrique Peña Nieto ya es un hecho y se ve reforzada por el reconocimiento de varios presidentes de diferentes procedencias políticas alrededor del mundo. Entre ellos Barack Obama (EEUU), Hugo Chávez (Venezuela) y Mariano Rajoy (España). Si bien se ha cuestionado la veracidad de los escrutinios frente a la oposición de varios sectores de la sociedad mexicana, aquellos cuestionamientos no han sido lo suficientemente severos como para deslegitimarlo hasta ahora.
Finalmente, sólo queda esperar y ver de qué manera se irán desplazando los diferentes actores que se presentan en oposición al mismo. Pues, es indudable que darán seguimiento a cada paso que el actual ejecutivo pueda realizar.

LA CONDENA DE LA REGIÓN A PARAGUAY

POR GONZALO PASCUAL

Golpe de Estado Parlamentario, Golpe Institucional, Golpe con ropaje jurídico, entre otros, fueron los calificativos para describir lo que sucedió en Paraguay el 22 de junio pasado. Lo cierto, es que el ahora ex Presidente Fernando Lugo Méndez fue destituido de su cargo de forma tan sospechosa que es muy difícil creer que todo estuvo "al amparo de la ley". Si bien la Constitución Nacional paraguaya contempla la posibilidad de que el Presidente y muchos otros funcionarios del gobierno pueden ser separados de sus cargos mediante un juicio político en el que se hallen culpables, también es verdad que en un Estado de Derecho con un régimen democrático (o una Democracia que rige en un Estado de derecho), no basta con que el juicio exista sino que es necesario también que el mismo se lleve a cabo bajo el cumplimiento de todas las garantías propias de un juicio justo.

La Carta Magna de Paraguay establece en su artículo 17 (mucho antes de hablar sobre el juicio político -art. 225-) los derechos procesales de todo ciudadano paraguayo. En vista de este artículo, se puede decir que por más que el juicio político esté en la letra de la ley no fue llevado a cabo bajo las garantías procesales que la misma exige, y es por esta misma razón es que distó mucho de ser "justo" y por eso se habla de Golpe, sea Golpe de Estado Parlamentario, Golpe institucional, o como se lo quiera llamar. Lo importante es que hubo un Golpe al poder, un asalto, y eso es lo preocupante de toda esta historia en esta parte del mundo donde se creía que estas prácticas, cualquiera sea la forma que adquieran, ya se habían superado. Sin embargo, la región y el hemisferio no se quedaron de brazos cruzados y las organizaciones internacionales americanas tomaron cartas en el asunto.

Frente a la noticia de que Lugo iba a ser sometido a un juicio político, los primeros en reaccionar fueron los países de América del Sur haciendo declaraciones particulares, aunque no tardaron en tomar una posición unificada bajo la figura de la Unasur. Esta organización se ocupó de la situación desde un primer momento, llamando a que se respete el debido proceso de defensa de Fernando Lugo durante el juicio y anunciando el envío de una misión especial de los cancilleres de los países miembros del organismo junto con su Secretario General. Dicha misión, se aclaró, tenía el fin de contribuir al encuentro de una solución y no buscaba incidir en las decisiones internas de Paraguay, puesto que Unasur no tiene potestad para hacerlo.

La misión consistió en una serie de reuniones tanto con Lugo, como con su entonces Vicepresidente Federico Franco y con dirigentes políticos de diversos partidos y autoridades legislativas de Paraguay para conocer la situación desde el mismo lugar de los hechos. Frente a la solicitud de que se respeten las garantías procesales y democráticas durante el juicio a Lugo que los representantes de la UNASUR y su Secretario General hicieron a todas las autoridades y dirigentes con quienes se reunieron, no obtuvieron respuestas positivas. Esto preocupó de gran manera al bloque porque en consecuencia, el juicio político no se adecuaría a las cláusulas democráticas de éste, el Mercosur y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), perjudicando a dichos procesos de integración regional.

Luego de la deposición del ex Presidente Lugo, el problema dentro del marco de la Unasur se agravó ya que Paraguay ejercía la Presidencia Pro-Témpore de la misma. El Presidente peruano, Ollanta Humala, propuso realizar una reunión extraordinaria en Lima (puesto que le correspondía asumir la Presidencia a Perú en el próximo período) con motivo de analizar qué medidas se iban a tomar con respecto a este tema, ya que como dijo el canciller ecuatoriano, la Presidencia Pro-Témpore "no puede estar en manos de un gobierno ilegítimo". Más tarde, se decidió hacer la reunión con exclusión de Paraguay, en Mendoza el día 29 de junio para que coincida con la XLIII Cumbre del Mercosur que tendría lugar los días 28 y 29. En dicha reunión, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado de Unasur decidió suspender a Paraguay del organismo, hasta que se realicen los nuevos comicios generales

en abril de 2013, y retirarle la Presidencia Pro-Témpore, que quedó en manos de Ollanta Humala. Esta decisión estuvo fundamentada principalmente en el comunicado que emitió la misión extraordinaria que la Unión de Naciones Suramericanas envió a Paraguay el 22 de junio.
Frente a esta decisión, el gobierno de Federico Franco dijo que la suspensión se había realizado sin tener en cuenta el tratado constitutivo de la organización, por lo que no sería válida jurídicamente para Franco. De esta forma, rechazó la decisión del bloque e indicó que evaluará la posibilidad de retirarse del mismo.
Otra organización que entró en escena fue el Mercosur. Este proceso de integración trató la cuestión de Paraguay en una reunión ordinaria, la "XLIII Cumbre del Mercosur", en la cual tampoco estuvo presente la delegación paraguaya, que fue excluida de la misma unos días después de la deposición de Lugo. Esta exclusión se debió a que se consideró que la destitución de Lugo constituyó una ruptura al "Protocolo de Ushuaia de Compromiso Democrático en el Mercosur" (firmado en 1998 y elaborado justamente como respuesta a una amenaza de interrupción del proceso democrático paraguayo en 1996). Como Lugo no fue juzgado bajo el debido proceso se consideró que no se respetó la "plena vigencia de las instituciones democráticas" de la que habla el Protocolo y a la cual considera como una "condición esencial para el desarrollo del proceso de integración".
La reunión ordinaria del Mercosur culminó con la suspensión de Paraguay hasta que recupere el orden constitucional democrático. De esta manera no se le impusieron al país sanciones económicas puesto que las mismas sólo afectarían al pueblo paraguayo y no mucho a los responsables de la lamentable situación. La suspensión de Paraguay en el Mercosur respondió a las mismas razones por las cuales se lo excluyó de la cumbre.
Las repercusiones en Paraguay no se hicieron esperar y el nuevo Gobierno paraguayo rechazó la suspensión que sufre esgrimiendo que tal decisión carece de legalidad y avisó que se tomarán acciones para dejarla sin efecto. Sin embargo, con esta suspensión toman fuerza los sectores contrarios al Mercosur en el país. Un ejemplo de esto es que la Unión Industrial del Paraguay planteó realizar un referéndum para abandonar el bloque y firmar acuerdos con otros países del mundo, cosa que claramente no beneficiaría a Paraguay ya que sus socios comerciales más importantes son aquellos que pertenecen al Mercosur.
En tanto que la Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, tampoco se quedó atrás, aunque su reacción fue más fría (como se esperaba). Sin embargo, si bien fue cautelosa, no fue descomprometida. Las primeras expresiones de Insulza, Secretario General de la OEA, dieron a conocer su "firme convicción de que la estabilidad institucional que ha logrado la región debe protegerse salvaguardando el más pleno respeto al debido proceso, no sólo en la forma sino también en el fondo" y que "ello implica la debida valoración de las pruebas de la acusación y la aplicación de plazos que permitan la adecuada preparación y presentación de los descargos de los acusados en el pleno ejercicio de su derecho a la defensa". Insulza sospechó desde un primer momento que en Paraguay no se había dado un debido proceso judicial a Lugo.
Con respecto a esto último, el Secretario dijo que "lo que nos afecta no es solamente el irrespeto de la ley, sino el hecho de que a la norma escrita se le busca una interpretación propicia para alterarla en los hechos". Luego de esto, el máximo representante fue designado en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA a viajar a Paraguay con los Representantes Permanentes ante la OEA de Canadá, Estados Unidos, Haití, Honduras y México para recabar información que elevaría al mismo Consejo. Insulza, antes de viajar, consideró que en Paraguay hay una crisis institucional pero no Golpe de Estado, puesto que en la OEA todavía no hay consenso con respecto a la situación.
La misión de la OEA en Paraguay tuvo una agenda de dos

días muy agitada: La delegación enviada se entrevistó con el nuevo Presidente Federico Franco, con el nuevo Canciller Estigarribia; con el ex Presidente Lugo, sus abogados y el ex Ministro del Interior, y con los titulares de las Cámaras Alta y Baja del Congreso. A su vez, recibieron a los dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Frente Guasú, Partido Colorado, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) y Partido Patria Querida (PPQ), y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Por último, los representantes de la OEA se encontraron con la Conferencia Episcopal Paraguaya, la Federación Nacional Campesina, líderes indígenas, la Unión de Industriales, periodistas y propietarios de medios de comunicación finalizando así su misión, de la cual darán cuenta al Consejo Permanente el día lunes 9 de julio. Las únicas declaraciones de Franco con respecto a la misión de la OEA se basaron en asegurar que en su país no hubo Golpe de Estado.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos al tener en cuenta que el ex Presidente de Paraguay contó con sólo un día para preparar su defensa y que el Congreso rechazó la petición de prórroga, expresó que la destitución de Lugo es inaceptable y que "el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay".
La CELAC, que recién está empezando a dar sus primeros pasos como organización, decidió analizar la realidad paraguaya en una reunión extraordinaria para discutir las acciones que va a tomar. Este es un desafío más que importante para esta nueva organización que surgió el pasado 3 de diciembre en Caracas y que actualmente preside Chile.
Las demás organizaciones del Continente, a pesar de que Paraguay no forma parte de ellas, no se quedaron calladas. La que realizó declaraciones más efusivas fue la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la cual no esperó a que terminara la cumbre de Rio+20 para realizar un comunicado especial donde rechazaba "la maniobra de los sectores de la derecha política del Paraguay, de iniciar un juicio político contra el Presidente constitucional de esta hermana República" y dando apoyo explícito al entonces todavía Primer Mandatario Lugo.
El apoyo a Lugo y el rechazo a la situación paraguaya (calificada como Golpe de Estado por la organización) se basaron en el incumplimiento del debido proceso del juicio político y en la violación al derecho de defensa (ya que sólo le dieron dos horas para presentarla).
La posición de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se vio reflejada en la UNASUR. Sin embargo, su Secretario General no dejó de abogar por la institucionalidad democrática y la recomposición de la situación política de Paraguay. Por otro lado, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) exhortó a Paraguay a restituir el orden democrático y se mostró preocupado porque consideraron que los derechos de Fernando Lugo fueron violentados, aunque no pudo esgrimir una posición común respecto del derrocamiento. Costa Rica ofreció, de ser necesario, asilo político a Lugo mientras que Nicaragua, El Salvador, y República Dominicana no reconocieron al nuevo gobierno.
Panamá, por su parte, duda del proceso de juicio político aplicado al ex Presidente, pero no determinó si reconoce o no al gobierno de Franco.
Por último, la Organización de las Naciones Unidas tan sólo "abogó" por una salida pacífica a la crisis política que se vive en Paraguay y vio con buenos ojos las misiones enviadas por OEA y Unasur, y la reunión extraordinaria que esta última realizó en Mendoza.

"El apoyo a Lugo y el rechazo a la situación paraguaya se basaron en el incumplimiento del debido proceso del juicio político y en la violación al derecho de defensa."

POR IMANOL BARRANGÚ

CUMBRE DE RÍO: CRÓNICA DE UN FRACASO ANUNCIADO

Todos se dieron cita en Rio de Janeiro, todos llegaron con sus consignas y sus pancartas, todos llegaron con sus esperanzas e ilusiones, pero una vez mas todos se fueron con las manos vacías.
Más de un centenar de ONGs, instituciones sociales, empresas privadas, representantes de gobiernos locales y 193 países (con la presencia de 130 Jefes de Estado y de Gobierno) se reunieron en Rio de Janeiro, Brasil, para celebrar la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable. Es la tercera conferencia de este tipo luego de la primera cumbre histórica en 1992, también en Rio de Janeiro, y la de Johannesburgo en 2002.
El objetivo y el llamado de las Naciones Unidas era ambicioso: invitar a todos los Estados, organizaciones e instituciones de la sociedad civil y los ciudadanos en general a "sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad", teniendo presente tres temas fundamentales: el fortalecimiento de los compromisos políticos en favor del desarrollo, el balance de los avances y las dificultades vinculados a su implementación y las respuestas a los nuevos desafíos emergentes de la sociedad.
Las comisiones preparatorias -que venían trabajando desde hace años- se reunieron antes de la celebración oficial de la Cumbre y elaboraron el documento titulado "El futuro que queremos", el cual fue luego aprobado por los Jefes de Estado presentes. Desde que se dio a conocer dicho documento no pararon de llover críticas por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil que lo consideraban como un "mero acuerdo cosmético" o un "texto vacío de compromisos". Ya quelas expectativas de la ciudadanía en general y también de algunos gobiernos, lejos estuvieron de ser cumplidas.
"El futuro que queremos" es un texto de 53 páginas que aborda distintos problemas del medioambiente, como la deforestación, el uso irracional de los recursos, la desertificación y el cambio climático. Además el documento intenta crear un marco para la implementación de medidas y políticas que garanticen el desarrollo sustentable. No obstante las buenas intenciones que inspiraron la redacción del documento, son pocos los compromisos concretos que se lograron.

El "consenso posible"

La delegación brasileña fue la encargada de elaborar el documento e impulsar las negociaciones necesarias para que la cumbre no termine en un fracaso. Así el objetivo principal era arribar a un acuerdo –cualquiera que sea- y para ello se sacrificó una gran cantidad de compromisos explícitos. El texto no hace más que repetir los problemas urgentes del medio ambiente que a esta altura son ya de sobra conocidos. La creación de una Organización Mundial del Medio Ambiente parece -por ahora- una mera utopía, debido a la negativa de Estados Unidos, Japón y los países europeos, quienes son los que más deberían aportar. Otra gran omisión fue la falta de acuerdo sobre la eliminación de subsidios a la producción de hidrocarburos.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff señalo que Rio+20 no es el punto de llegada, sino que debiera transformarse en el punto de partida. Definió al acuerdo como el "consenso posible" en medio de la gran crisis económica que afecta a los países más desarrollados. Son justamente estas naciones quienes más se opusieron a crear un fondo de 30.000 millones de dólares para financiar medidas de protección ambiental. El mismo Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que el documento final podría haber sido más "ambicioso".
"El futuro que queremos" es lo máximo que se logró y quizás no podrá ser de otro modo si no se visualiza claramente cuál es la verdadera dificultad. El problema no es medioambiental, el problema es político. Los objetivos de protección del medio ambiente son inconsistentes con el sistema actual. En un mundo en donde la gente vale por lo que tiene es lógico que se exacerbe el consumismo y se destinen miles de millones de dólares a crear bienes y servicios que raras veces la gente necesita. Como planteó Evo Morales en la Cumbre de Rio, la llamada economía verde, defendida por los países desarrollados, "mercantiliza la naturaleza". Es decir, convierte todo "lo vivo", los árboles, las especies animales, los océanos, etc. en mercancías susceptibles de ser valorada en dinero y tasa de ganancia empresarial, dejando en un segundo plano las verdaderas necesidades del ser humano.
Por ello si francamente se pretende salvar la naturaleza se debería avanzar hacia un gran cambio cultural alterando los patrones de consumo y producción; modificando también la noción de desarrollo basada en el materialismo y la acumulación desmedida sin ningún sentido humano más que la avaricia de querer tener más, hacia otra que instale en el centro de la escena el respeto por el medio vivo. Cambiar el rumbo actual del planeta no podrá soslayar, por otra parte, que son las grandes potencias industriales quienes más contribuyen a deteriorar la naturaleza y por ende las que cargan sobre sí la mayor responsabilidad.
En tiempos donde los rescates financieros están tan de moda, nos preguntamos por qué no aprobar un salvataje para la Tierra. Pero claro, la naturaleza no paga tasas de interés y menos aún negocia con los seres humanos.

ESCALADA DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN BOLIVIA

POR ROMINA VIALE

El gobierno de Evo Morales se vio nuevamente rodeado por una serie de protestas sociales que tuvieron como epicentro a la ciudad de La Paz, y que pusieron de manifiesto una tendencia a la erosión del apoyo social al líder cocalero. A los reclamos de sectores como el de los universitarios, médicos, transportistas y mineros; durante el mes de junio aparecieron en el centro de la agenda política y social las demandas de los policías y, una vez más, las de los indígenas amazónicos y a los de Potosí.

Tras su reelección en el 2010, Morales ha tenido que superar una serie de situaciones conflictivas, originadas por reclamos surgidos del seno mismo de sectores sociales que propiciaron su arribo y permanencia en la presidencia. Que las mismas han impactado en la caída de la popularidad de Morales al 39% en comparación con el 64% que alcanzó en la referida elección.

Hasta el momento, y pese a diferentes escaladas de la tensión, denuncias cruzadas y acusaciones mutuas entre los diferentes sectores políticos nacionales, el gobierno boliviano ha podido atravesar exitosamente la oleada de reclamos, apaciguando la conflictividad social y atendiendo, en la mayoría de los casos, a los reclamos populares.

De los tres conflictos mencionados, el más relevante en función a su repercusión, implicancias y alcance, fue el de los agentes y suboficiales de la Policía Nacional que iniciaron un motín de seis días que dejó a la totalidad del país sin servicios policiales. Los principales impulsores de las protestas fueron los oficiales de bajo rango, que rechazaron el incremento de 32 dólares propuesto por el gobierno, y actuaron realizando diferentes demostraciones de fuerza como el saqueo al edificio donde funciona la Inteligencia y el Tribunal Disciplinario de la Policía y la Interpol, quemando asimismo sus archivos.

La posterior represión a una marcha en apoyo al oficialismo y al mantenimiento del proceso de cambio y mejoras sociales, llevó al gobierno a especular sobre la posibilidad de un intento de golpe de Estado.

Para Evo Morales, y su núcleo más cercano de funcionarios, "la intransigencia de algunos policías que rechazaron el convenio y usaron violencia contra ciudadanos muestra que buscan algo más que mejoras salariales, buscan la desestabilización del gobierno".

Según el Presidente boliviano, los grupos de derecha infiltrados en los reclamos pretendían ocasionar muertos y heridos para propiciar un golpe de Estado tal como ocurrió en Paraguay con la destitución del presidente electo, Fernando Lugo tras un desalojo de campesinos que derivó en un enfrentamiento con un saldo de 17 muertos. Asimismo, denunció públicamente conspiraciones para asesinar al Ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Por su lado, los sectores opositores negaron enfáticamente las acusaciones del gobierno y se refirieron a "una paranoia golpista que pretende encubrir el desgaste gubernamental".

Mientras la capital política de Bolivia estaba siendo afectada por los reclamos policiales, un grupo de 200 indígenas abrían un nuevo frente de conflicto al arribar a la ciudad luego de haber recorrido más de 600 kilómetros en protesta por la construcción de una autopista que pretendía atravesar el parque nacional Tipnis. Los dirigentes aborígenes decidieron acampar en las afueras de La Paz, aguardando la finalización de las protestas de los oficiales, y luego se trasladaron a la Plaza de Armas, esperando ser atendidos por el presidente Morales.

Finalmente, grupos de aborígenes mineros de la población de Mallku Khota al norte de Potosí también encabezaron reclamos en contra de la concesión minera a la empresa canadiense South American Silver, lo que derivó en enfrentamientos fata-

les entre grupos indígenas detractores y partidarios de la empresa y en la posterior toma de rehenes de funcionarios de la misma.
Pese a la contemporaneidad de los reclamos y al asedio de demandas recibidas, el gobierno pudo alcanzar soluciones favorables. Por el lado de los policías, la tranquilidad y la restitución de los servicios llegó tras la firma de un acuerdo de 10 puntos en el que se establece, entre otras cuestiones, un incremento de 100 bolivianos (13 dólares) al haber básico y un bono adicional de 200 bolivianos (26 dólares), con lo que el sueldo de los agentes de menor graduación se equipara así con el de sus pares de las Fuerzas Armadas, tal como reclamaban. Asimismo, el acuerdo incorpora la doble dotación de ración seca al año (arroz, azúcar y harina), la creación de la Defensoría de la Policía y la formación de una comisión para analizar la jubilación con el 100% del salario.
Los reclamos de los mineros de Mallku Khota también fueron atendidos. En este caso, se estableció la suspensión de las actividades de exploración y explotación de la empresa canadiense en la mina, estipulando la nacionalización de la misma.
No obstante, los indígenas amazónicos no corrieron la misma suerte. La segunda marcha que realizaron a La Paz en menos de un año para preservar el territorio del Tipnis y a su flora y fauna autóctona, culminó con la decisión de retirarse ante la negativa de Morales de reunirse con los dirigentes indígenas debido a la falta de acuerdo sobre la presencia del Consejo Indígena del Sur (Conisur) en las negociaciones. Mientras que el gobierno consideraba que debería estar presente; la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), convocante de la marcha, entendía lo contrario alegando que no pertenece al Tipnis.
No obstante, los principales referentes de la protesta destacaron sus intenciones de continuar en la lucha y anunciaron el rechazo y resistencia al proceso de consultas sobre la construcción de la carretera que el gobierno iniciará el próximo 20 de julio.
Durante los últimos meses, el escenario nacional boliviano se ha caracterizado por una escalada de conflictividad social creciente. Hasta el momento, el gobierno de Morales ha podido sortear las diferentes situaciones generadas por los reclamos populares vinculados con demandas específicas de cada sector. Sin embargo, el interrogante principal se vincula con la capacidad gubernamental de por un lado, responder a este espiral de reclamos cuya onda expansiva parece no tener un final cercano y por el otro, a las posibilidades de fortalecer su base de apoyo popular, la cual parece estar atravesando por una etapa de profunda erosión.

“el escenario nacional boliviano se ha caracterizado por una escalada de conflictividad social creciente. Hasta el momento, el gobierno de Morales ha podido sortear las diferentes situaciones generadas por los reclamos populares vinculados con demandas específicas de cada sector.”

POR GRACIELA CAPISANO

LA AGENDA EXTERNA DE CFK

A lo largo del mes de junio la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo una agenda variada en el ámbito de las Relaciones Internacionales. En primer lugar, viajó a Nueva York donde el 14 de junio, al cumplirse 30 años del fin de la Guerra de Malvinas, realizó una presentación ante el Comité de Descolonización de la ONU. Esto constituye una verdadera novedad, ya que hasta ahora estas presentaciones siempre habían estado a cargo de nuestro Embajador ante dicho organismo y es la primera vez que concurre un Jefe de Estado a este foro.
Antes de la exposición ante el comité la Presidenta mantuvo una reunión con el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, quien se ha ofrecido a mediar para lograr que el Reino Unido acepte sentarse a la mesa de negociaciones.
Tras la presentación, la Presidenta mantuvo una reunión en el Council of Americas con empresarios estadounidenses interesados en invertir en nuestro país y posteriormente se trasladó a Los Cabos, México, donde se realizó la VII Cumbre del G20. Durante la reunión de las principales economías del mundo, la Presidenta también mantuvo encuentros bilaterales con sus pares de Francia, Rusia y China.
Finalmente, ya de regreso en nuestro país la Jefa de Estado recibió al premier chino Wen Jiabao al celebrarse el 40 aniversario desde el establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre ambos países.
Además de la agenda bilateral, durante la estadía del Primer Ministro chino se realizó una videoconferencia con los Presidentes de Brasil y Uruguay para abordar la posibilidad de un acuerdo comercial entre el Mercosur y China.

Malvinas

La presentación de la Presidenta ante el Comité de Descolonización por la cuestión de Malvinas fue un hecho histórico ya que es la primera vez que concurre un Jefe de Estado argentino para realizar en persona la defensa y exposición de la postura de nuestro país ante dicho organismo. No menos importante es el hecho de que la comitiva oficial estuviera conformada por funcionarios y legisladores de todo el arco político (con la sola excepción del PRO que decidió no participar), lo cual muestra que la cuestión Malvinas constituye verdaderamente una política de Estado, y por lo tanto en este tema no interesan las diferencias político-partidarias. Claro que a los fines de la presentación y en términos objetivos esto quizás no cambie nada, pero la estrategia sí tiene el efecto importantísimo de otorgar mayor legitimidad a la postura del gobierno ante la Comunidad Internacional.
Antes de su exposición la Presidenta mantuvo una reunión con el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, quien aseguró que insistirá en su rol de mediador para lograr que el Reino Unido acceda a dialogar con nuestro país y subrayó que nuestro país es un "actor de paz". Mientras tanto, ese mismo día el Secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos inglés, Jeremy Browne viajaba a Malvinas para participar de una ceremonia en la que conmemoraron los 30 años del fin de la Guerra. Es decir que el gobierno británico no sólo no asistió a la reunión del Comité de Descolonización como de costumbre, sino que además dio una clara señal contraria al diálogo enviando por primera vez desde 2008 a un Secretario de Estado en visita oficial a las islas. Este gesto se suma al anuncio realizado por la Asamblea Legislativa del gobierno kelper acerca de la realización de un referéndum para determinar la voluntad de los isleños de continuar bajo la tutela británica. La consulta se realizaría durante la primera mitad del 2013 y su llamado fue decidido en conjunto por los isleños y el Foreign Office. Tras el anuncio, el Primer Ministro británico David Cameron solicitó a la ONU que se respete lo decidido, pero el problema de esta estrategia es que la Comunidad Internacional no reconoce a los kelpers como actores del conflicto ya que se trata de una población trasplantada luego de la invasión.
La Presidenta realizó la presentación el 14 de junio, al cumplirse 30 años del fin de la guerra. Junto a ella asistieron al Comité, además de los funcionarios y legisladores, un grupo de ex combatientes y familiares de caídos en la guerra quienes fueron seleccionados como "peticionarios" por Argentina: Alejandro Betts (nacido en las islas en 1947) y Marcelo Luis Vernet (tataranieto del primer comandante político y militar argentino en las islas). De acuerdo con el procedimiento habitual, las solicitudes ante el Comité las realizan los "peticionarios" que

"La presentación de la Presidenta ante el Comité fue un hecho histórico ya que es la primera vez que concurre un Jefe de Estado argentino para realizar en persona la defensa y exposición de la postura de nuestro país ante dicho organismo."

deben ser habitantes o ciudadanos de los Estados bajo análisis. Tanto Betts como Vernet han sido convocados en otras oportunidades por la Cancillería argentina para realizar las peticiones. Fueron ellos quienes además se encargaron de responder a los representantes kelpers, Roger Edwards y Mike Summers, miembros de la Asamblea Legislativa, quienes presentaron la disputa como una cuestión de "Autodeterminación de los Pueblos".
Luego de las exposiciones de los peticionarios llegó el turno para que la Presidenta realice su presentación. La mandataria recurrió a argumentos geográficos e históricos y dio a conocer un documento de la Cancillería en el que consta que durante la tercera presidencia de Perón existieron negociaciones secretas ente nuestro país y el Reino Unido. También dedicó algunos párrafos a cuestionar al gobierno de David Cameron por su reticencia a sentarse en la mesa de negociaciones, su negativa a acatar las resoluciones de la ONU y por haber celebrado los 30 años del fin de la guerra izando la bandera de los kelpers.

La Presidenta remarcó que no concurría al Comité por cumplirse un nuevo aniversario desde el fin de las hostilidades, sino porque en unos meses (el 20 de diciembre) se cumplen 180 años de la usurpación de las islas por parte de los ingleses. Destacó la distancia de 14.000 kilómetros que separa a Malvinas del Reino Unido y sostuvo que las Islas no sólo son argentinas sino que forman parte de la plataforma continental sudamericana. Con respecto a la región hizo hincapié en que ésta es una zona de paz y que la presencia inglesa es causa de preocupación para todos los países del subcontinente, pero también para la comunidad internacional en su conjunto dado el incumplimiento de las resoluciones de la ONU por parte de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Una parte central de la exposición fue la revelación de documentación de la Cancillería en la que consta la existencia de negociaciones secretas previas a la guerra. Éstas se produjeron durante la tercera presidencia de Perón y en las mismas el Reino Unido manifestó su voluntad de "poner fin a la disputa sobre la soberanía mediante la aceptación de la Argentina de una co-soberanía sobre las islas". Nuestro país envió en esa oportunidad una contrapropuesta y se avanzó en las negociaciones, pero el fallecimiento del presidente Perón y la situación política posterior en ambos países tornaron imposible continuar con ese proceso. La importancia de esto radica en que se demuestra claramente la incoherencia del gobierno inglés que, mientras en algún momento estuvo dispuesto a negociar la disputa de soberanía, ahora pretende evadir su responsabilidad invocando el argumento de la "autodeterminación". Es por ello que la Presidenta procuró remarcar que lo que pretende la Argentina no es el establecimiento de negociaciones, sino su "reanudación".
Al final de la presentación, se destacó una frase de la Presidenta en la que sostuvo que "no estamos pidiendo que nos den la razón sino que se sienten a una mesa a dialogar", el Comité aprobó una nueva Resolución cuyo proyecto fue presentado por Chile. En ésta se insta al Reino Unido a retomar las negociaciones con nuestro país y se sostiene que "la única manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas es la solución pacífica y negociada de la controversia sobre soberanía que existe entre la República Argentina y el del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte".
Tras las presentaciones, los kelpers propusieron establecer una mesa de negociaciones con nuestro país, lo cual fue rechazado inmediatamente por el canciller Timerman, ya que es clara la posición del gobierno argentino acerca de que el único interlocutor válido en la actual disputa por la soberanía de las islas es el Reino Unido. Esto fue subrayado incluso por la Presidenta, quien habló de un conflicto "bilateral" con otro Estado Soberano.

"Una parte central de la exposición fue la revelación de documentación de la Cancillería en la que consta la existencia de negociaciones secretas previas a la guerra."

Anuncios de inversiones
Tras la presentación en el Comité de Descolonización, la Presidenta mantuvo un encuentro con representantes de las principales empresas de Estados Unidos con interés en realizar negocios en nuestro país. La reunión se realizó en el Council of Americas y durante la misma la mandataria anunció que Monsanto realizará una inversión de 1800 millones de pesos para establecer una nueva planta productora de semillas de maíz en nuestro país (lo que implica además la creación de unos 400 puestos de trabajo), y de 180 millones de pesos para crear dos estaciones experimentales de maíz y soja. Asimismo, se dio a conocer un proyecto del laboratorio Pfizer junto con el argentino ELEA para el desarrollo de una vacuna contra la bronquiolitis y la firma Procter & Gamble presentó un plan de equilibrio de balanza comercial a partir de la instalación de tres nuevas líneas de producción de sus artículos en nuestro país.

La Cumbre del G20
Luego de la reunión con empresarios la Presidenta partió de Nueva York hacia Los Cabos, México, para participar de la VII Cumbre del G20. Durante la misma -que estuvo centrada en la crisis europea y fundamentalmente en el estado de las economías española, griega e italiana- hubo dos posiciones

antagónicas muy claras que ubicaron por un lado a los BRICS junto con la Argentina y aliados y por otro lado a Alemania, el Reino Unido, el Banco Central Europeo y el FMI. El enfrentamiento se da en torno a temas tales como el ajuste versus el impulso de la economía; el rol de las calificadoras de riesgo y el proteccionismo.
En primer lugar, mientras Alemania insiste en la aplicación de medidas económicas ortodoxas como el ajuste y los planes de rescate al sector financiero, las potencias emergentes sostienen la necesidad de implementar medidas que impulsen la actividad productiva y generen empleo estimulando y al mismo tiempo el consumo. Por otro lado, tanto nuestro país como los BRICS vienen sosteniendo la necesidad de ejercer un fuerte control sobre las agencias calificadoras de riesgo, grandes responsables de la actual crisis financiera internacional. Sin embargo, las principales potencias no están dispuestas a acceder en esta cuestión. Por último, mientras Estados Unidos y la Unión Europea presionan a países como el nuestro que aplican políticas de comercio administrado, los Países en Desarrollo sostienen que se debe atacar todo tipo de proteccionismo, en particular terminar con la aplicación de barreras para-arancelarias que son utilizadas sistemáticamente por los países desarrollados. El caso de Francia es especial ya que desde la llegada de François Hollande ha modificado su postura. Por último, Estados Unidos mantiene una posición de equilibrio entre uno y otro extremo.
En torno a estas cuestiones la Presidenta buscó aunar posiciones con Brasil así como con otros países como Rusia, China y Francia. Durante los encuentros que mantuvo en privado con cada uno de los mandatarios de estos países se encontraron puntos de contacto en los discursos y estrategias que vienen sosteniendo. En primer lugar, con Dilma Rousseff unificaron posiciones, previo al plenario con los demás países. Ambas mandatarias sostienen que la crisis en la eurozona tiende a agravarse y por ello acordaron coordinar políticas de protección en el seno del Mercosur.
Otro encuentro muy esperado fue con el presidente francés François Hollande, con quien nuestro país actuó en forma conjunta en los preparativos de la Cumbre para insistir en incluir el tema del empleo. Durante la reunión entre ambos mandatarios hubo coincidencias y se destacó la voluntad de ambos de relanzar la relación bilateral. Sin embargo, en el plenario la posición del flamante Presidente francés se vio empañada por la presentación de un documento común por parte de la Unión Europea en el que primó la posición que viene sosteniendo la alemana Ángela Merkel.
La Presidenta también mantuvo una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin con quien abordó, además de los temas de agenda de la Cumbre, un proyecto por el que la petrolera estatal rusa Gazprom trabajará en colaboración con YPF. Este anuncio implica la posibilidad de que una de las empresas más importantes del mundo en el área de los hidrocarburos realice inversiones en exploración y explotación, particularmente en el área de los shale.
Por último, se celebró también en el marco de la Cumbre un encuentro entre la Presidenta y su par chino Hu Jintao. La entrevista sirvió para adelantar los temas que se tratarían luego en nuestro país cuando el Premier Jiabao vino con motivo de cumplirse 40 años del establecimiento de Relaciones Diplomáticas. Durante el encuentro entre los presidentes se resaltó la importancia de la relación comercial entre ambos países, las coincidencias en el diagnóstico y las medidas para salir de la actual crisis y se ratificó el apoyo de China al reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas, así como el respaldo de nuestro país al principio de "una sola China".
De lo anterior se desprende un saldo positivo para nuestro país en materia de relaciones bilaterales, con el establecimiento de fuertes alianzas con actores clave del sistema internacional. Sin embargo, y a pesar de la presión que ejercieron en conjunto las potencias emergentes, el balance final de la Cumbre no es muy auspicioso. Fundamentalmente porque la Declaración Final refleja una postura tibia que en definitiva es más de lo mismo, aunque ha habido algunas novedades. El documento desarrolla las conclusiones de los países en 85 puntos en los que se reconoce que la economía mundial continúa "siendo vulnerable" y se sostiene que los países firmantes van a "actuar juntos para fortalecer la demanda y restablecer la confianza con el fin de apoyar el crecimiento y la estabilidad financiera".
La Declaración Final y el Plan de Acción de Los Cabos cubren tan amplio espectro que en definitiva se vuelve a evadir la cuestión de las causas estructurales de la actual crisis. Y es que durante la Cumbre no fue posible conciliar las posiciones de quienes se aferran a políticas ortodoxas y aquellos que, como nuestro país, vienen defendiendo la aplicación de políticas keynesianas. No resulta extraño que no se llegue a un acuerdo en las soluciones cuando se parte de diagnósticos tan disímiles. Lo cierto es que en buena medida terminó primando la posición que defendió la Unión Europea como bloque, más algunos aliados, como el propio anfitrión del encuentro, el mexicano Felipe Calderón. Si bien es cierto que los BRICS y Argentina, y en al-

"La Presidenta también mantuvo una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin con quien abordó, además de los temas de agenda de la Cumbre, un proyecto por el que la petrolera estatal rusa Gazprom trabajará en colaboración con YPF."

gunos puntos también Estados Unidos y otros países aliados, lograron incorporar temas tales como la promoción del empleo, el estímulo de la producción, etc.
Ahora bien, el punto más destacado del Plan de Acción de Los Cabos es sin duda la inyección de recursos al FMI que ahora contará con 456 mil millones de dólares, duplicando así su capacidad de préstamo. El objetivo es que el FMI disponga de los recursos necesarios para asistir a regiones que enfrenten situaciones económicas complejas, como los casos de Grecia y España. Sin embargo, nuevamente se evade el tema central que tiene que ver con las causas estructurales de estas crisis y se insiste en la aplicación de medidas de ajuste como parte de la condicionalidad a la que están sujetas las líneas de crédito del FMI.
Esta ampliación de recursos del organismo multilateral contó con los aportes de los BRICS que en conjunto suman 75 mil millones de dólares y condicionaron sus desembolsos a la modificación del funcionamiento del FMI incluyendo una reforma global del mecanismo de votación y las cuotas. La Unión Europea por su parte, aportará 200 mil millones, Alemania contribuirá con 54,7 mil millones y Japón 60 mil millones, mientras que Corea del Sur, Arabia Saudita y el Reino Unido sumarán 15 mil millones cada uno. Otros países que realizarán aportes serán México, Noruega, Suiza, Suecia, Dinamarca, Singapur, Australia y Polonia.
Con respecto al tema central de la Cumbre –la crisis en la Eurozona- el documento final refleja los intereses de la Unión Europea al declarar que el G20 "acogió con beneplácito el plan de España para recapitalizar su banca" y en cuanto a Grecia, uno de los puntos afirma que los países esperan que la Unión Europea "trabaje en colaboración con el próximo gobierno para asegurar que se mantengan en el camino a la reforma y la sustentabilidad dentro de la Zona Euro". Asimismo, se apoya el compromiso europeo de unidad bancaria, sostener "respaldamos la intención de considerar pasos concretos hacia una arquitectura financiera más integrada que abarque la supervisión, la resolución y la recapitalización bancaria, así como al aseguramiento de los depósitos". Se acordó también crear un Consejo de Estabilidad Financiera que permita contar con un sistema más seguro que contribuya a evitar en el futuro crisis como la actual.
Por último, en el Plan de Acción el G20 decidió ampliar hasta el 2014 la cláusula standstill por la cual se invita a los países a no cerrar las fronteras a las importaciones, acordando restaurar el crecimiento y actuar bajo el principio del libre mercado, en contra del proteccionismo. Esto muestra a las claras que nuevamente primó la visión ortodoxa, poniendo el acento sobre el proteccionismo comercial más que en el área financiera, donde las calificadoras de riesgo y los paraísos fiscales casi no fueron mencionados ni se les dio el tratamiento necesario. Si bien en la Declaración Final se condena la actuación de las calificadoras de riesgo y también se mencionan los paraísos fiscales, no se puso énfasis en ellos, ni se adoptaron medidas concretas para regular su funcionamiento. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de transparentar la actividad de las calificadoras que han tenido un comportamiento procíclico y ha planteado enfáticamente que los paraísos fiscales constituyen una fuente de desestabilización ya que allí se canaliza gran parte de la fuga de capitales de los países en crisis. Sin embargo, los intereses en juego para las principales potencias mundiales son demasiado grandes y de momento sólo han accedido a tratar el tema de manera superficial.
Los líderes del G20 volverán a reunirse en Septiembre de 2013 en San Petersburgo y han acordado implementar un muevo mecanismo de rendición de cuentas para monitorear el nivel de cumplimiento de los acuerdos alcanzados hasta su próximo encuentro. El encargado de dicho monitoreo será el presidente ruso, Vladimir Putin, quien estará al frente de la presidencia del grupo el año próximo.

La visita del Premier chino Wen Jiabao

En el marco de una gira por la región que lo llevó a participar de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Río + 20 en Río de Janeiro, pasando por Uruguay y Chile, el Primer Ministro Wen Jiabao visitó nuestro país en ocasión de celebrarse el 40 aniversario del establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la República Popular China (RPC) y Argentina. Es la primera vez en 27 años que un Premier chino visita nuestro país.
El vínculo comenzó el 19 de Febrero de 1972 cuando nuestro país reconoció a la RPC, pero no fue hasta el 2004 que dicha relación cobró un fuerte impulso cuando el entonces Presidente Néstor Kirchner y su par Hu Jintao decidieron establecer una Asociación Estratégica. A partir de ese momento el intercambio comercial y las inversiones chinas en nuestro país crecieron sustancialmente. Hoy la RPC disputa el segundo lugar a la Unión Europea como socio comercial de nuestro país y es uno de los principales inversores. Además ambos países poseen intereses comunes y mantienen perspectivas muy similares y por ende han establecido una estrecha colaboración en el ámbito internacional, concretamente en espacios como el G20 así como en el marco de la Ronda Doha y en temas variados que van desde el cambio climático a la necesidad de reformas en el orden económico y financiero internacional.

El Primer Ministro chino arribó a nuestro país el domingo 24 de junio acompañado por los titulares de las carteras de Comercio, Agricultura y Desarrollo y Reforma, así como un importante número de empresarios. Luego de la bienvenida formal ofrecida por el Canciller Héctor Timerman y de una cena en su honor encabezada por el Vicepresidente Amado Boudou, el Premier finalmente se reunió con la Presidenta el lunes 25 en el Museo del Bicentenario, donde participaron del acto en celebración de los 40 años de Relaciones Diplomáticas. Tras una reunión en privado ambos participaron de un acto en el que rubricaron varios acuerdos bilaterales. El Premier también visitó el Congreso y mantuvo un encuentro con referentes argentinos de la cultura, la ciencia y el arte. Finalmente, durante la cena ofrecida por la Presidenta en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada mantuvieron una teleconferencia con los líderes del Mercosur (en una circunstancia especial, ya que de momento Paraguay ha sido suspendido del bloque debido a la ruptura del orden democrático y hasta tanto se celebren elecciones).

Con respecto a los convenios bilaterales, éstos abarcaron diferentes áreas. En primer lugar se firmó un Contrato de Financiamiento entre el Ministerio de Economía de la Nación y los Bancos de Desarrollo y de Industria y Comercio de China por el cual se otorgan a nuestro país líneas de crédito para la reactivación y puesta en valor de 1500 kilómetros de vías, 50 locomotoras y 2550 vagones, en el marco del Proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas. En segundo lugar, se firmó un Convenio de Cooperación en Energía Nuclear para la realización de estudios conjuntos para la eventual construcción de la Central Nuclear Atucha IV (una cuarta central nuclear en nuestro país) que se ejecutaría con participación local y financiamiento chino. En este proyecto, la Corporación Nuclear Nacional China entraría a competir como precalificada con otras firmas interesadas como la rusa Rozatom, la francesa Areva y la estadounidense Westinghouse.

En este marco se acordó también la transferencia de tecnología de la RPC a nuestro país para la fabricación de combustible nuclear. Además, la RPC demostró interés en participar del desarrollo de dos represas en Santa Cruz y estableció contactos con el gerente general de YPF ya que pretenden aumentar su participación en la empresa. Un tercer acuerdo fue suscripto entre los Ministerios de Agricultura de ambos países y consiste en un Programa de Cooperación Agrícola Global a 5 años por el cual se realizarán trabajos conjuntos en biotecnología, investigación científica agrícola, ganadería, sanidad animal, lechería, siembra directa, pesca, agricultura, semillas, comercios e inversiones agrícolas y cooperación en foros internacionales. Además, suscribieron un Memorando de Cooperación en Materia de Semillas que apunta al intercambio de información y experiencias en nuevas variedades de vegetales y producción de semillas genéticamente modificadas y un Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación con la Administración Estatal de Granos para establecer un mecanismo de intercambio y cooperación sobre la distribución así como sobre política de comercialización, manipulación y reservas de granos y procesados. Por último, además de los acuerdos se avanzó en otros temas como las negociaciones para la concesión de una licencia por parte de las autoridades chinas al laboratorio argentino Biogénesis Bagó para la instalación en la RPC de una planta productora de vacunas antiaftosa. También se trató la posibilidad de crear parques industriales binacionales que apuntarían a aumentar el flujo de comercio e inversiones bilaterales y promover la innovación e intercambio tecnológico.

En el marco de la visita del Premier chino a nuestro país se celebró una videoconferencia con los presidentes de Brasil y Uruguay, encabezada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Durante la misma Wen Jiabao propuso al Mercosur potenciar las relaciones y sugirió analizar la posibilidad de establecer una zona de libre comercio entre la RPC y el bloque. El encuentro se produjo en un marco de anomalía ya que el cuarto socio, Paraguay, había sido recientemente suspendido del Mercosur en aplicación del Protocolo de Ushuaia tras el golpe institucional contra el Presidente Fernando Lugo. Tras el diálogo se firmó una Declaración Conjunta entre la RPC y el Mercosur sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Comercial en la que, ante la "incertidumbre e inseguridad generada por la actual situación económica mundial resultante de la crisis con epicentro en las economías desarrolladas", "se comprometen a profundizar y fortalecer su colaboración sobre la base del beneficio mutuo". En este sentido se comprometen a alcanzar para el 2016 un intercambio comercial de 200 mil millones de dólares y a "proporcionar un ambiente favorable para las inversiones recíprocas".

El Premier chino ha mostrado el fuerte interés de su país en estrechar los lazos con la región, no sólo en el aspecto comercial, sino que incluso ha declarado en un encuentro con la Secreataria Ejecutiva de la CEPAL su pretensión de profundizar la cooperación estratégica mediante el establecimiento de un mecanismo de diálogo político. Estrechar los vínculos con la RPC implica un gran desafío para nuestro país y la región en general. Pero en un contexto de crisis de las principales economías desarrolladas, y en el que se dan importantes coincidencias en el diagnóstico y las recetas para afrontar dicha situación entre nuestros países y el gigante asiático, la propuesta plantea una serie de posibilidades que deben ser aprovechadas.

CHARLES TAYLOR Y SU MERECIDA CONDENA

POR AGUSTINA MARCHETTI

A principios de 1991 tuvo lugar una guerra civil en Sierra Leona, considerada una de las más cruentas del continente africano en las últimas décadas. Charles Taylor, presidente de la vecina Liberia, mantuvo estrechas relaciones con uno de los frentes implicados en la guerra sierraleonesa. Razón por la cual fue acusado de cometer crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Luego de 20 años se produce un hito en el derecho internacional ya que un fallo histórico de la Corte Penal Internacional condenó a Charles Taylor a 50 años de prisión por estos crímenes.

Y este fallo es histórico por dos motivos: primero, porque por primera vez la justicia internacional lleva a término un proceso contra un antiguo Jefe de Estado y segundo, porque sin haber estado en territorio sierraleonés, sin haber presenciado dichos crímenes se lo ha considerado a Charles Taylor como responsable directo de los cargos por los que lo acusaron. En la lista de cargos se destacan, terrorismo, asesinato, violencia contra la vida, violación, mutilaciones, esclavitud sexual y violencia sexual, atentados contra la dignidad personal, tratamiento cruel, uso de niños soldados, esclavitud, saqueos y otros actos inhumanos.

Taylor y su vínculo con Sierra Leona

La guerra civil inicia cuando el entonces presidente de Sierra Leona, Momoh, intervino en la guerra que se estaba librando en Liberia en apoyo de las fuerzas regionales conocidas como Fuerzas de pacificación de los Países de África Occidental (ECOMOG por sus siglas en ingles).

Frente a esto, Charles Taylor dirigente entonces del Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL) decidió, a partir de la elaboración de una estrategia de venganza, brindarle apoyo en la zona oriental de Sierra Leona a quienes llevaban el nombre de Frente Revolucionario Unido (FRU) que agrupaba a rebeldes de Sierra Leona. Fue entonces que el FRU bajo el mando de Foday Sankoh intervino en Sierra Leona en un intento de derrocar al gobierno de Momoh, e inició la guerra civil que duró hasta 2002 cuando, tras varios intentos, se hizo efectivo el cese del conflicto. Uno de estos intentos lo representó el Acuerdo de Paz de Noviembre de 2000 el cual planteaba el fin de las hostilidades. Si bien, en un principio se estimó que el mismo no lograría los resultados esperados pues había sido firmado entre el Gobierno de Sierra Leona, que por ese momento atravesaba un contexto de gran debilidad y un aislamiento internacional muy marcado, y una fracción del FRU que no era representativa de todo el grupo sino de solo una parte de los rebeldes. Luego el acuerdo resultó efectivo y en enero de 2002 se declaró oficialmente la finalización del conflicto sierraleonés. Cuando se habla de varios intentos se hace referencia a que en el año 2000 se había alcanzado un cierto grado de paz como consecuencia del Acuerdo de Paz de Noviembre de 2000 el cual representaba el supuesto fin de las hostilidades. ¿Por qué supuesto? Ese acuerdo se había firmado entre el Gobierno de Sierra Leona y el FRU en un contexto de gran debilidad y aislamiento internacional muy marcado, con lo cual se puede concluir que esa fracción del FRU no era representativa de todo el grupo, sino de solo una parte de los rebeldes. Aun así parece ser que después de todo, el acuerdo resulto efectivo y en enero de 2002 se declaro oficialmente la finalización del conflicto sierraleonés.

Charles Taylor en Liberia

Samuel Doe fue presidente de Liberia de 1980 a 1990 y asumió el poder tras una revuelta popular. Charles Taylor formaba parte del gobierno de Doe pero tras una coyuntura económica y política de crisis que golpeó duro al país africano: se alejó

del gobierno y junto a otros rebeldes formó el Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL) el cual lideró.
En 1990 la guerra civil en Liberia era un hecho concreto, el NPFL de Taylor pronto controló gran parte del territorio liberiano y fue en ese contexto que el ECOMOG declaró un Gobierno Interino de Unidad Nacional (IGNU), con Amos Sawyer como su presidente.
Hacia 1992, se negoció el Acuerdo de Cotonou entre NPFL, IGNU y los partidarios restantes de Doe, conocido como el Movimiento de Liberación Unido de Liberia para la Democracia o ULIMO (por sus siglas en Ingles).
Luego de una serie de intentos de alianzas y coaliciones entre los distintos movimientos, en 1997 Charles Taylor formó el Partido Patriótico Nacional con el cual ganó las elecciones presidenciales. Con este triunfo se comenzó a vivir en Liberia un clima que parecía estar signado por la paz.
No obstante todos aquellos que estaban fuera del proyecto de Taylor se unieron y formaron el grupo "Liberianos Unidos para Reconciliación y Democracia (LURD)" quienes buscaban la desestabilización del gobierno, y que lograron que se desatara la segunda Guerra Civil Liberiana donde diferentes grupos se levantaron en armas y alrededor de 150.000 personas murieron y miles sufrieron heridas y amputaciones, un castigo empleado por el gobierno de Taylor que duró hasta 2003.
La finalización de la guerra está vinculada con la Resolución 1509 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La misma buscó apoyar la aplicación del acuerdo de cesación del fuego y el proceso de paz, proteger al personal y las instalaciones de la ONU y la población civil, apoyar a las actividades de asistencia humanitaria y en materia de derechos humanos, además de contribuir a la reforma de los cuerpos de seguridad, incluida la capacitación de la policía nacional y la formación de un nuevo cuerpo militar restructurado.
Poco tiempo después, Charles Taylor fue desterrado a Nigeria y posteriormente en 2005 se celebraron en el país africano elecciones democráticas, las cuales resultaron ser bocanada de aire fresco para Liberia. Un respiro después de tanto conflicto interno y una esperanza para construir un país democrático luego de un largo período de guerra.

La condena

Desde el destierro de Taylor, la Comunidad Internacional estuvo esperando la decisión del Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) con sede en La Haya. Y finalmente esa merecida condena llegó cuando el juez Richard Lussick leyó la sentencia del Juicio a Taylor;
Si bien se destaca el hecho de que se haya realizado un acto de justicia dicha sentencia no estuvo exenta de disconformidad: la fiscalía había solicitado 80 años de condena pero al final se estableció una pena de 50 años para Taylor. Esta diferencia estuvo basada en el hecho de que el ex presidente de Liberia no participó directamente en la comisión de los crímenes sino que estuvo vinculado con los mismos a través del apoyo logístico y moral brindado a los rebeldes de Sierra Leona. Estos hechos implican una clara complicidad en la comisión de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la guerra.
Algo que se debe considerar y que no es de menor importancia es que se trata del primer jefe de Estado convicto y condenado por crímenes de guerra por un tribunal internacional desde los juicios de Núremberg. En virtud de un acuerdo especial con el Tribunal, la pena de cárcel se deberá cumplir en territorio de Reino Unido por lo que Charles Taylor, de 64 años vivirá el resto de su vida fuera de su continente y cumpliendo una merecida condena.